

IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.

Comunicación y Extensión Rural: crisis del neoliberalismo y la posibilidad de nuevas prácticas articulatorias.

María Josefina Pividori y Martín Andrés Ghisio.

Cita:

María Josefina Pividori y Martín Andrés Ghisio (2011). *Comunicación y Extensión Rural: crisis del neoliberalismo y la posibilidad de nuevas prácticas articulatorias*. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/190>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

“Comunicación y extensión rural: crisis del neoliberalismo y la posibilidad de nuevas prácticas articuladoras”¹

Lic. María Josefina PIVIDORI - Lic. Martín Andrés GHISIO²

Palabras clave: Extensión rural - Neoliberalismo - Comunicación - INTA - Desarrollo

1. Introducción

Desde mediados del siglo XX, en el contexto del desarrollismo³, la extensión rural se constituyó como la modalidad de intervención en el medio rural de un conjunto de instituciones en América Latina, como el IICA en Costa Rica, el INIA en Chile, el INIA de Uruguay y el Embrapa en Brasil. En Argentina, la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) emerge como cristalización de este paradigma de la modernización desarrollista. En el medio rural, y aunque actualmente el INTA no es el único actor (como sí lo fue en su surgimiento), se sostiene desde hace 50 años como la referencia central en relación a políticas públicas y prácticas de intervención para el sector. Desde sus orígenes, la institución responde al objetivo de “impulsar y vigorizar la investigación y extensión agropecuaria para acelerar la tecnificación y mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.⁴

El fin de ese siglo encontró a América Latina y Argentina en el marco de la aplicación de políticas neoliberales. En el contexto de los años noventa, el sistema de extensión rural del INTA fue relegado a la asistencia social para dar respuestas a la creciente pobreza y exclusión social del sector en el marco del neoliberalismo. La crisis de diciembre de 2001 marcó un punto de ruptura y el comienzo del nuevo siglo se convirtió en una oportunidad para repensar la práctica extensionista en el contexto de políticas agropecuarias que propiciaron su recuperación e impulso. Como dice Carlos Alemany (2008), “volvió la extensión... y ¡se armó la discusión!”.

En el marco de estos procesos, este trabajo busca explorar las prácticas articuladoras entre comunicación y extensión rural en el INTA en la actualidad. Es decir, busca reconocer las formas que adoptan estas articulaciones a partir de la perspectiva del análisis político del discurso (Laclau y Mouffe, 1987). El estudio implica un trabajo de historización y contextualización que permite pensar y comprender las articulaciones entre comunicación y extensión rural en relación y

¹ Esta ponencia constituye parte de nuestro trabajo final de la Licenciatura en Comunicación Social (Escuela de Ciencias de la Información - Universidad Nacional de Córdoba). Su propósito consiste en abordar algunas cuestiones en relación al tema de la comunicación y la extensión rural en el INTA.

² Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba

³ Corriente política o ideológica de orientación economicista - ampliamente difundida en el mundo a partir del auge expansivo capitalista de los años cincuenta y sesenta - que enfatiza el crecimiento económico cuantitativo sobre la base del aumento de las inversiones considerando que de ello depende el logro de otros objetivos de progreso económico, político, cultural y social (Di Tella, 2004: 183).

⁴ ¿Qué es el INTA? En: <http://www.inta.gov.ar/ins/presenta.htm>

en tensión con el contexto histórico, social y político de Argentina y América Latina.

2. Extensión rural, neoliberalismo y después

Desde su surgimiento, a mediados del siglo XX en América Latina, la extensión rural ha seguido un orden de actuación socio-históricamente creado y por tanto revisable y redefinible, pero con un pasado reconocido históricamente como modalidad de intervención (Cimadevilla, 2003: 104). Este pasado responde a una mirada hegemónica, deudora del difusionismo desarrollista, que tiende a naturalizar la concepción de la extensión tornándola universal e inmodificable. Un significado que ha impregnado las acciones de extensión y sus representaciones hasta el presente. Este significado, se centró durante décadas en los extensionistas, sus programas, proyectos y saberes y en la transmisión de informaciones y transferencia de tecnologías (Huergo, 2004a: 9).

En el contexto de los años noventa, persiste la idea de la extensión rural como transferencia de tecnología para la modernización de la agricultura, que además, al alcanzar el ideal de modernización, evolucionaría hacia su privatización (Alemany, 2008: 28). Carlos Alemany señala que:

“el debate sobre la extensión rural en los ´90, que estuvo hegemonizado por la idea de la privatización de estos servicios públicos, estaba poniendo en tela de juicio la existencia misma de la extensión rural en el actual estado de desarrollo del agronegocio latinoamericano. Desde este punto de vista la privatización de la extensión convencional en realidad significaba la finalización de su ciclo histórico latinoamericano. Para el agronegocio la extensión rural dejaba de ser útil o funcional a sus intereses” (Alemany, 2008: 29).

El fundamento para la desaparición de la extensión se sostenía en la visión de una agricultura “viable” e industrializada, frente a una agricultura “no viable” y resistente a la modernización como un problema social que debía ser abordado desde una perspectiva asistencialista. Como sucedió en décadas anteriores, los programas de extensión rural se vieron influenciados por las políticas de organismos internacionales. Así como en los años sesenta las políticas desarrollistas fueron motorizadas por la Alianza para el Progreso⁵, el Consenso de Washington⁶ tuvo radical importancia en la disminución de la intervención estatal en la década del noventa.

En los últimos años, la extensión rural cobró un renovado impulso como parte de las políticas públicas para el medio rural en muchos países de América Latina y en

⁵ Fue un programa de asistencia técnica y económica diseñado por los Estados Unidos para América Latina durante la década del sesenta.

⁶ Documento escrito que comprende la sistematización de un conjunto de propuestas de política económica producida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Consta de un conjunto de instrumentos de política económica preparados para orientar y resolver los problemas de las economías latinoamericanas. Entre los principales puntos se destacan: reducción y reorientación del gasto público, reforma impositiva, liberalización comercial y financiera, apertura a la entrada de inversiones extranjeras, privatizaciones y desregulaciones.

Argentina en particular (Alemany, 2008). El cambio de contexto social y político habilitó la posibilidad de repensar la práctica extensionista luego de los intentos de su privatización y la posibilidad de su desaparición junto al debilitamiento de las políticas públicas.

Actualmente, a diferencia de décadas anteriores, el rol otorgado a la extensión rural, no surge de la influencia de organismos internacionales -CEPAL, FMI, Banco Mundial, FAO, etc.- sino como producto del cambio de escenario latinoamericano y de un renovado impulso de las políticas públicas (cfr. Alemany, 2008). En este sentido, el INTA es un actor relevante en relación a las políticas públicas para el sector rural, tanto por la continuidad de su accionar desde hace más de medio siglo, así como por condensar la visión del sector público nacional sobre la extensión y el desarrollo rural (Alemany, 2003: 140).

Luego de la crisis del año 2001, a nivel institucional, el INTA comienza una revisión de la práctica extensionista, acompañada también por las transformaciones políticas y el ingreso de nuevos profesionales a la institución con una mirada diferente de lo rural. Lo rural deja de ser visto sólo desde lo meramente productivo para ver al hombre desde una perspectiva social, cultural e histórica. Se comienza a priorizar la mirada de lo local en el diseño y formulación de programas y proyectos. Esta nueva mirada tensiona con el enfoque asistencialista al cual había sido relegada la extensión durante la década del noventa, pero también tensiona a nivel interno revelando una disputa por las necesidades y demandas a las cuales el extensionista debía atender (Alemany, 2003, 2008).

Considerando los cambios mencionados, nos preguntamos entonces si este nuevo contexto produce nuevas articulaciones (Laclau y Mouffe, 1987) entre comunicación y extensión rural. Por ello, exploramos las articulaciones entre comunicación y extensión rural en el INTA, a partir de una investigación empírica que involucró a productores, técnicos extensionistas y directivos, intentando reconocer sentidos y articulaciones hegemónicas, residuales y emergentes (Williams, 1997).

De esta manera, consideramos como hipótesis que hay sentidos y articulaciones que operan actualmente en las prácticas de extensión del INTA aunque desconocemos de qué modo. En este sentido, nos interrogamos sobre la presencia hegemónica o no de alguna de las formas de entender las prácticas articuladoras entre comunicación y extensión rural o si existe la posibilidad de la emergencia de un nuevo sentido de las articulaciones.

3. Algunas consideraciones teóricas

En este apartado se desarrollan los significados de los conceptos que orientaron el abordaje del problema - objeto de nuestro trabajo. Para ello, se utilizaron antecedentes teóricos de algunos autores y también, una resignificación de acuerdo al problema - objeto de estudio.

3.1. Las articulaciones

En el lenguaje de las ciencias sociales, el concepto de articulación designa una práctica que consiste en juntar diferentes elementos y combinarlos para constituir una nueva identidad (Howarth, 1996: 129). Desde este significado, articulación permite relacionar diferentes elementos que, al relacionarse entre ellos, dejan de ser lo que eran.

En relación a nuestro problema de investigación, pensar las relaciones entre comunicación y extensión rural en términos de articulación, nos brinda una perspectiva que postula que estos elementos, al articularse, se modifican e influyen dando lugar a una nueva identidad.

Este concepto ha cobrado especial relevancia en el desarrollo teórico contemporáneo de las ciencias sociales de la mano de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (1987), quienes han dedicado especial atención al valor de este concepto para la teoría social y política. El supuesto principal de esta perspectiva es que la sociedad puede considerarse una configuración discursiva, de manera que todo lo que ocurre en ella posee un significado.⁷ Es por eso que el desarrollo que proponen en relación al concepto de articulación resulta fructífero para complejizar el abordaje de nuestro problema. Esto es, reconocer las articulaciones entre comunicación y extensión rural en el contexto de un determinado discurso, en tanto permite revisar los anudamientos entre significantes y significados, la configuración de estatutos y la consecuente naturalización de sentidos.

3.1.1. Articulaciones y formaciones hegemónicas, residuales y emergentes

El concepto de articulación elaborado por Laclau y Mouffe (1987) permite pensar la interinfluencia e intermodificación entre determinados elementos. Ellos sostienen que la articulación es una práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de éstos se modifica como resultado de esa práctica. El resultado de esa práctica es el discurso como una totalidad estructurada. Además, llamarán momentos a las posiciones diferenciales que aparecen articuladas al interior de un discurso. Por el contrario, llamarán elementos a toda diferencia que no se encuentre articulada discursivamente (Laclau y Mouffe, 1987: 119). En este sentido, el discurso como totalidad, como sistema de identidades diferenciales, existe como una fijación parcial de un exceso de sentido que lo subvierte. Este exceso es el terreno para la constitución de toda práctica social. Los autores llaman a este terreno “campo de la discursividad” ya que determina el carácter discursivo de todo objeto y a su vez, la imposibilidad de que un discurso logre una sutura última. La imposibilidad de una fijación última de sentido implica, al menos, la existencia de fijaciones parciales. Pero, para subvertir el sentido, tiene que haber al menos un sentido que pueda ser subvertido (Laclau y Mouffe,

⁷ Hay quienes acusan a Laclau y Mouffe de reducir la realidad al discurso. Sin embargo, estos autores intentaron, desde un principio, prevenir tales críticas: “Un terremoto o la caída de un ladrillo es un suceso que ciertamente existe (...) Pero, el que su especificidad como objetos se construya en términos de fenómenos naturales o expresiones de la ira de Dios, dependerá de la estructura del campo discursivo. Lo que se niega no es el hecho de que tales objetos existan fuera del pensamiento, sino que puedan constituirse como objetos en la ausencia de ciertas condiciones discursivas de emergencia” (Laclau, Mouffe, 1987: 123).

1987: 128). Es por eso que los discursos se constituyen como un orden en relación a un exterior discursivo que potencialmente lo subvierte.

En este sentido, dirán que “todo objeto se constituye como objeto del discurso, en la medida en que ningún objeto se da al margen de toda superficie discursiva de emergencia” (Laclau y Mouffe, 1987: 121). De este modo, una misma entidad puede constituirse discursivamente de diferentes maneras de acuerdo a la formación discursiva desde la cual se la nombra y otorga significado.

Por otro lado, el discurso como significación se caracteriza por ser diferencial, inestable y abierto (Buenfil Burgos, 1993). Es diferencial en cuanto que ni el discurso ni sus elementos tienen una significación intrínseca e inmanente, sino relacional. Cada elemento adquiere sentido por el lugar que ocupa dentro de un sistema discursivo y por sus relaciones con otros discursos. Por ser diferencial y relacional, el discurso es inestable ya que el significado no se fija de una vez y para siempre, sino que se establece temporalmente en función del sistema discursivo en el que ocupe un lugar. A su vez, el discurso es abierto en cuanto que es incompleto y es siempre susceptible de ser ligado a un nuevo significado y es vulnerable a adquirir nuevos sentidos.

Laclau y Mouffe recuperan el concepto gramsciano de hegemonía para entenderla como un tipo particular de articulación al referirse a la combinación de una serie de discursos en un proyecto con aspiraciones universales (Soage, 2006: 54). Una formación hegemónica es aquella que pretende lograr la articulación completa y final de los elementos que van a configurar una formación social. Al hablar de formación social, lo hacemos en el sentido de referente empírico, mientras que al hablar de formación hegemónica, nos referimos a una totalidad articulada de diferencias propias del referente empírico. En consecuencia, la formación hegemónica va produciendo fijaciones parciales del sentido allí donde había variaciones. Por ello, las prácticas articulatorias son el campo de emergencia de la hegemonía, en tanto es un campo en el que los elementos no se han cristalizado en momentos, es decir, en posiciones diferenciales al interior de un discurso. Es por eso que la hegemonía supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que solo puede constituirse en un campo dominado por prácticas articulatorias (Laclau y Mouffe, 1987: 155). Así, Laclau (1990) propone pensar lo social como el juego infinito de las diferencias, es decir, el discurso. Pero también como “el intento de limitar ese juego, de domesticar la infinitud, de abarcarla dentro de la finitud de un orden” (Laclau, 1990: 104).

En este sentido, Laclau y Mouffe sostienen que toda fijación de sentido es siempre parcial debido a que las articulaciones discursivas no pueden contener a la totalidad de los discursos (Soage, 2006: 55). En consecuencia, hablar de una formación hegemónica plantea el problema de la construcción de los límites de la misma. En este sentido es que una totalidad se transforma en una formación hegemónica transformando sus límites en fronteras que le permiten significarse a sí misma, a la vez que constituye una cadena de equivalencias que construye aquello que está más allá de los límites y como algo que ella no es (Laclau y Mouffe, 1987: 164). De esta manera, la lógica hegemónica no puede dar cuenta

de la totalidad de lo social y constituir su centro, porque de ser así, se habría producido una sutura y el concepto mismo de hegemonía se habría auto eliminado (cfr. Laclau y Mouffe, 1987: 163). Por eso, la apertura de lo social es precondition para cualquier práctica hegemónica y si bien esta tiende a lograr un cierto cierre, este nunca es total ya que la hegemonía misma como práctica no sería posible.

En consonancia con este planteo, Raymond Williams propone que la hegemonía es un proceso activo ya que si bien “por definición siempre es dominante, jamás lo es de modo total o exclusivo” (1997: 135). La hegemonía no se trata sólo de rasgos y elementos de lo dominante. Por el contrario, es siempre “una interconexión y una organización más o menos adecuada de lo que de otro modo serían significados, valores y prácticas separadas e incluso dispares que este proceso activo incorpora a una cultura dominante y a un orden social efectivo” (Williams, 1997: 137).

Traemos aquí el pensamiento de Williams en tanto nos interesa la productividad de las nociones que construye para pensar formas de articulación hegemónicas, pero también formas o prácticas articularias que no lo son. En este sentido, Williams propone para ello las nociones de lo residual y lo emergente.

El proceso hegemónico está en la práctica lleno de contradicciones y de conflictos no resueltos (Williams, 1997: 140). La cultura entonces está compuesta por un conjunto de relaciones dinámicas y contradictorias entre prácticas articularias dominantes, residuales y emergentes. De esta manera, las articulaciones dominantes se encuentran en un proceso de tensión constante junto a articulaciones residuales y emergentes como formaciones alternativas o de oposición que cuestionan su dominación.

Las formaciones residuales son formas producidas en el pasado pero que tienen efectos como un efectivo elemento del presente (Williams, 1997: 144). En términos de sentido, estas formaciones son entendidas como un “remanente” de una formación anterior. Un elemento residual se halla a cierta distancia de la cultura dominante pero puede ser incorporado por ésta mediante un proceso de tradición selectiva como una operación que desde el presente pretende sustanciar el pasado.

Las formas emergentes son aquellos nuevos significados que se crean constantemente. Es por ello que la cultura dominante necesita incluir elementos y aspectos de lo emergente para conservar su hegemonía. Ello hace que resulte difícil distinguir entre lo que es nuevo, como nueva fase de una cultura dominante, de lo que es emergente, en tanto se constituya como un elemento alternativo o de oposición (Williams, 1997: 146).

En las relaciones al interior de un proceso cultural, tanto las definiciones de lo emergente como de lo residual sólo pueden producirse en relación a un sentido de lo dominante (Williams, 1997: 146). De ahí que lo residual y lo emergente son significativos tanto en sí mismos como en relación a las características que revelan de lo dominante. En cuanto al sentido de lo residual, es más fácil de

comprender ya que una parte de lo residual se relaciona con formaciones sociales anteriores al proceso cultural en que se generan determinados significados. Diferente es la situación en relación al sentido de lo emergente. Por ello, lo que importa en la comprensión de lo emergente, de modo distinto de lo dominante como de lo residual, es el descubrimiento de nuevas formaciones. Lo que se debe observar es una “preemergencia” activa e influyente aunque no esté plenamente articulada (Williams, 1997:149).

4. Prácticas articuladoras en el contexto del neoliberalismo

Desde la década del cincuenta, para gran parte de la población mundial, el término desarrollo se convirtió en un recordatorio de lo que no son, de su condición inferior e indigna. Hasta principios de los años ochenta, las prácticas extensionistas amparadas bajo la concepción de la difusión de innovaciones privaron a grandes sectores de las poblaciones latinoamericanas de la oportunidad de definir sus propias formas de vida en tanto los cambios debían ser promovidos por agentes externos a ellas (Thornton y Cimadevilla, 2008: 114). Por eso, para escapar al “subdesarrollo”, no existe otro camino que imitar a los “países desarrollados”. La historia latinoamericana muestra como el discurso en torno al desarrollo como proceso único e inevitable, no refiere a una transformación y mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad llevado a cabo por sus propios miembros, sino que, por el contrario, “se vinculan a un concreto modelo de relaciones sociales y económicas con presunta validez universal, construido desde la racionalidad económica y la lógica social del sistema hegemónico” (Alemany, 2008: 37).

De este modo, la historia del desarrollo en América Latina se vincula a una construcción mítica, marcada fuertemente por su pretensión de validez universal. A su vez, se fue asentando la idea de que era necesario importar los modelos de afuera para poder salir de la situación de subdesarrollo. Acentuando también, la dependencia económica, política y cultural hacia los “países desarrollados”.

4.1. Neoliberalismo y espacio rural

La década del noventa marcó una nueva forma de entender a la extensión rural que la llevó a su privatización casi total y al cierre de su ciclo histórico en los países de América Latina (Alemany, 2008). Sin embargo, más allá de los procesos propios de los noventa, los cambios producidos fueron la expresión y profundización del modelo neoliberal iniciado en los años setenta.

En la década del setenta, las democracias de los países de América Latina fueron interrumpidas por gobiernos militares que se asentaron en toda la región. Los gobiernos de facto no sólo afectaron la vida social y política de los países latinoamericanos, sino que también y fundamentalmente, pusieron en marcha planes económicos que afectaron a largo plazo las condiciones de vida de sus habitantes. Se generó un proceso de expansión de las relaciones de mercado que tiene que ver con la integración de las diversas partes de la economía mundial hacia la constitución de un “mercado mundial” (Teubal, 2001: 46). Asumen un rol protagónico las empresas transnacionales en todas las esferas de la economía,

pero en este caso, en el ámbito rural, modifican las relaciones que hasta ese momento existían.

En este sentido, siguiendo a Miguel Teubal, son dos los factores que modifican la situación anterior. Por un lado, se produce un dominio del capital sobre el agro que implica entre otras cosas:

“la difusión creciente del trabajo asalariado, la precarización del empleo rural, la expulsión a pequeños y medianos productores del sector, las migraciones campo – ciudad, la orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados, la conformación de los denominados pools de siembra, entre otras” (Teubal, 2001: 47).

Por otro lado, asumen una importancia inexistente hasta ese momento, los complejos agroindustriales liderados por grandes corporaciones transnacionales vinculadas con el comercio mundial de productos agropecuarios (Teubal, 2001: 47).

Paralelamente a este proceso, se comienza a hablar de una nueva etapa mundial en la evolución del capitalismo. Este proceso, que más adelante se denominó globalización, tuvo consecuencias también para el ámbito rural. En este sentido, Teubal señala, dentro de una serie de consecuencias, que las más importantes fueron:

“la mayor concentración de la tierra, la consolidación de un nuevo latifundismo relacionado con el capital financiero y agroindustrial, la mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los sistemas agroalimentarios, la provisión de nuevos insumos y tecnología agropecuaria, la transnacionalización de partes importantes del sistema agroindustrial al que se asocia el medio rural, etc.” (2001: 47).

A su vez, en la década del ochenta, los países latinoamericanos recuperan las democracias interrumpidas en la década anterior. Pero, si bien esto cambió la situación política y social, en el plano económico se acentuaron las medidas adoptadas anteriormente que llevaron a una situación de crisis cada vez mayor a los países de la región. Una de las principales cuestiones en esta década, está relacionada con la situación de dependencia alimentaria en la que se encontraban los países de América Latina, debido al sistema de exportaciones de alto valor agregado que imposibilitaban la autosuficiencia alimentaria. En ese sentido, empresas agroindustriales transnacionales influenciaron en el comercio exterior de los productos agropecuarios, expandiendo cada vez más sus influencias hacia el tercer mundo (Teubal, 2001: 48).

Ante la dependencia cada vez mayor de los países considerados desarrollados, los precios de los tradicionales productos de exportación de los países latinoamericanos cayeron abruptamente. Esto produjo un cambio en las políticas hacia el sector, en parte impulsado por los gobiernos, pero también influenciado por organismos internacionales de nuevos productos exportables que tradicionalmente servían para el autoconsumo. La consecuencia de esta

modificación fue un éxodo masivo y continuo del campo a la ciudad, ya que se vio afectada la obtención de productos básicos de consumo masivo, así como también la mano de obra utilizada para estos nuevos productos que eran las mujeres, en vez de los hombres.

Pero en el caso de países tradicionalmente agro exportadores, como Brasil y Argentina, se impulsaron nuevos productos como la soja y otras oleaginosas. De este modo, se produjeron cambios debido, principalmente, a que los grandes inversores fueron desplazando a los pequeños productores, monopolizando cada vez más, el trabajo, la tierra y los recursos (Teubal, 2001:51). En este sentido, la implementación de la siembra de nuevos productos como la soja implicó una serie de cambios. En primer lugar, al tratarse de un producto desconocido hasta el momento, se requería de nuevas inversiones a las que no todos los productores pudieron adaptarse. Por otro lado, para la producción de este cultivo, era necesaria la incorporación de determinados agroquímicos.

4.2. Argentina, los noventa y el sector agropecuario

En Argentina, Carlos Menem asume la presidencia de la Nación en 1989. Dentro de sus primeras medidas, se procede a dos de los cambios fundamentales que se realizaron en aquellos años: la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica. En relación a la Ley de Reforma del Estado, como señala Marisa Duarte (2002), se estableció entre otras medidas, que las empresas públicas podían ser privatizadas mediante decretos, dando la posibilidad a los acreedores del Estado de capitalizar sus créditos. Disponía también, los procedimientos para privatizar total o parcialmente las empresas del Estado y establecía preferencias para la adquisición de las empresas (Duarte, 2002: 47). Por su parte, la Ley de Emergencia Económica, buscaba reestructurar el gasto estatal suspendiendo los subsidios a la promoción industrial. Además, entre otras cosas, establecía igual tratamiento al capital nacional y extranjero, la suspensión del régimen de compra nacional, la autorización al Poder Ejecutivo para declarar prescindibles a los empleados designados por concurso (Duarte, 2002: 147). Estas políticas junto a otras que se tomaron en esos años, fueron impulsadas por el gobierno a través de la adhesión al denominado Consenso de Washington. Esto implicó que la política económica argentina estuviera determinada por el comportamiento de la política internacional y la influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Posteriormente, en 1991, se sancionó la Ley de Convertibilidad que equiparó al peso argentino con el dólar estadounidense.

La reestructuración del Estado, mentada por el entonces ministro de economía Domingo Felipe Cavallo, abarcó la privatización de las empresas y servicios públicos. Esta política de ajuste estructural impulsada por el menemismo, repercutió en el sector agropecuario dando lugar a una de las medidas que más afectó al sector: la eliminación de los entes reguladores de la actividad agropecuaria, entre ellos, la Junta Nacional de Granos, de Carnes y la Dirección Nacional de Azúcar. En el caso de la Junta de Granos, por ejemplo, significó que se le diera a las empresas exportadoras el control de las exportaciones cerealeras (Duarte, 2002: 60). Pero no fue sólo la eliminación de las juntas lo que modificó

sustancialmente la situación y la geografía del espacio rural argentino. Otra de las medidas tomadas por el gobierno de Menem fue la denominada “desregulación económica”. Para el sector agropecuario, esta medida implicó la ruptura definitiva de un modelo de desarrollo agrario caracterizado por la convivencia de los terratenientes con la pequeña y mediana agricultura familiar (Giarraca, 2003: 256).

Tal como afirma Norma Giarraca, a inicios de la década, los perjudicados del campo fueron los sectores subalternos (campesinos, pequeños capitalistas, jornaleros). Esta situación se agrava a mediados de la década porque se produjeron, por un lado, bajas en los precios internacionales, y por otro, cambios en las condiciones internas generados por la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación del sector (Giarraca, 2003: 256). En este sentido, aparecieron actores económicos que con la ayuda del Estado y los medios de comunicación, determinaron que la salida debía ser aumentar la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y aumento de las exportaciones de los derivados de éstas. Para eso, Giarraca (2003) señala que:

“se optó por nuevas tecnologías, nuevas prácticas agronómicas y por organizaciones empresariales con determinadas escalas de producción, complementadas por contratistas, subcontratistas y terceristas. Esta decisión comportaba cambios en las orientaciones productivas y en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores”.

De acuerdo con Marcelo Sili (2005), en el sector agropecuario, las políticas de ajuste estructural se tradujeron en una mayor estabilidad inicial de precios de los productos agropecuarios, altas tasas de interés, una creciente sobrevaluación de la moneda nacional con respecto al dólar y la escasez de financiamiento. En consecuencia, se privilegió “la expansión agraria y la rentabilidad de las empresas más grandes, que pueden continuar su proceso expansivo incorporando capital y nuevas tierras, en detrimento de los pequeños y medianos productores que abandonan la actividad y las áreas rurales” (Sili, 2005: 16).

Se acentúa un proceso de agriculturización que consiste en el crecimiento de la agricultura por sobre otras actividades en el ámbito rural como la ganadería. Este desplazamiento encuentra su antecedente a mediados de la década del setenta cuando bajo el régimen militar se comienzan a privilegiar los cultivos que el mercado demandaba. En los noventa, este proceso está directamente relacionado con el hecho de que el dinero invertido en la actividad agrícola se recupera en un periodo más corto que el de la actividad ganadera. De este modo, se privilegian las inversiones de corto plazo en la agricultura y especialmente, el cultivo de soja (Sili, 2005: 19). Los datos del Censo Nacional Agropecuario (2002) dan cuenta de esta transformación. Se observa, en relación a 1988, que en tres regiones del país - Noroeste, Noreste y Pampeana - hay un aumento del 138%, 86% y 60% respectivamente de la superficie implantada con soja. El aumento de la producción de soja, necesariamente, se produjo en detrimento de otros cultivos.

Producto de los efectos de la agriculturización se genera una expansión de la frontera agraria abarcando zonas destinadas tradicionalmente a la ganadería y

otras actividades. En consecuencia, se rompe el equilibrio entre la agricultura y la ganadería que permitía una cierta sostenibilidad de los suelos (Sili, 2005:20). También, se produce un creciente uso de insumos que acentúa la dependencia de la agricultura con respecto a las empresas que los abastecen y que, en su mayoría, son de origen transnacional.

Este proceso de agriculturización que caracterizó a los noventa fue acompañado, según Sili, por un fenómeno de diversificación productiva no agraria con la emergencia de nuevas actividades productivas en pueblos y pequeñas ciudades asentada en proyectos de turismo rural, pequeñas industrias manufactureras artesanales y nuevos servicios (2005: 56). Sin embargo, este proceso de diversificación tal como lo describe el autor, se vio truncado hacia fines de la década del noventa y se redujo considerablemente tras la devaluación de la moneda argentina, empujando a los productores a cultivar cereales y oleaginosas (Sili, 2005: 27).

Las diferencias entre aquellos productores que pudieron adaptarse al nuevo modelo y los que quedaron excluidos del sistema, se fueron profundizando produciendo cada vez más consecuencias adversas. Entre ellas, una de las más notorias fue la cuestión de la concentración de la tierra y la renta agraria, junto con el empobrecimiento de la mayoría de los productores familiares y un masivo éxodo hacia la ciudad en búsqueda de mejorar las condiciones de vida. Como señala Giarraca:

“sabemos que los pequeños y medianos productores no pudieron ingresar al nuevo modelo sojero y que, anteriormente con sus 50 hectáreas, vivían dignamente, daban trabajo a su familia y a terceros, educaban a sus hijos y renovaban sus equipamientos agrarios” (2003: 258).

La desaparición de esta franja de productores tuvo consecuencias para los poblados y ciudades intermedias rodeadas por el campo que vivían de actividades derivadas de él. Esto produjo un deterioro tanto económico como social, en la mayoría de los pueblos y localidades del interior.

En relación a la propiedad de la tierra, se produjo una reorganización en la tenencia que desembocó en una mayor concentración de la misma. Hubo diversos factores que provocaron esta situación: gran parte de los pequeños y medianos productores debieron vender sus tierras para poder hacer frente a deudas que tenían de créditos y préstamos contraídos en años anteriores tratando de integrarse a las nuevas tecnologías que se implementaban; el otro factor está relacionado directamente con el tipo de trabajo que se necesitaba para los nuevos cultivos. Así, al utilizarse maquinarias modernas y nuevos insumos que “mecanizaron” el proceso, no hacía falta mano de obra permanente para dedicarse a las tareas rurales. La concentración de la tierra derivó en dos situaciones que son a la vez causa y consecuencia una de otra. La primera de ellas relacionada con los nuevos propietarios de la tierra que eran tanto personas no vinculadas previamente a la actividad rural (por ejemplo, profesionales), así como grandes grupos económicos, nacionales o extranjeros. La segunda situación tiene que ver

con un masivo éxodo del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida.

De esta manera, se inicia un “proceso de especulación agraria” ya que los nuevos propietarios utilizaron esas tierras para producir lo que demandaba el mercado (Sili, 2005:28) a la vez que se favorece un modelo agrícola cada vez más concentrado. Según el Censo Agropecuario del año 2002, en todo el territorio argentino hay una caída en la cantidad de explotaciones agropecuarias. A nivel nacional, hubo una disminución de 24,5% en relación al Censo del año 1988. Pero en determinadas provincias la pérdida de explotaciones es mayor. Tal es el caso de Buenos Aires (33%), Córdoba (36,4%), Neuquén (41,4%), Tucumán (41,2%), Corrientes (35,7%), San Luis (39,3%) y Mendoza (31,6%). Esto refleja que a lo largo de ésta década, se produjo cada vez más la concentración de la tierra en menos manos. El arrendamiento aparece como una nueva figura en el espacio rural. Los dueños de la tierra ya no la trabajan, sino que son grandes contratistas y “pools de siembra” quienes lo hacen.

A su vez, este modelo acentuó el empobrecimiento de la mayoría de los productores familiares que, como mencionamos anteriormente, derivó en un continuado y progresivo éxodo. En 1991, la población rural de Argentina era de 4.179.418 personas, en tanto en 2001 era de 3.853.231 personas.⁸ Esto significa una reducción de la población rural de un 8%, situación que afectó en mayor medida a la región Pampeana, Nordeste y Patagonia.

4.3. Extensión rural en la década del noventa

Producto de los cambios promovidos desde el Estado nacional en los años noventa, la tarea de los extensionistas rurales estuvo marcada por el trabajo con aquellos productores rurales considerados “viables”, es decir, aquellos capaces de poder adoptar nuevas tecnologías y continuar con la titularidad de sus tierras. En este sentido, como señala Alemany, “el debate sobre la extensión rural en los noventa en realidad, estaba poniendo en tela de juicio la existencia misma de la extensión rural en el estado de desarrollo del agro negocio latinoamericano” (2008: 29). De este modo, se ingresa en un proceso de privatización de la extensión rural en la mayoría de los países de la región producto de la adscripción a las políticas del Consenso de Washington. Al respecto, Alemany considera que “el proceso de privatización de la extensión tiene sus fundamentos en la visión de que la agricultura “viable” está ya industrializada e integrada subordinadamente a las cadenas agroalimentarias” (2008: 29). En oposición a una agricultura “viable”, se encuentra una agricultura “no viable” como un “residuo resistente a la modernización” y como un problema que debe ser abordado como problemática social (Alemany, 2008: 29).

El proceso de disminución de la capacidad de intervención de los estados latinoamericanos produjo diversas consecuencias para el sector rural, aunque sin duda, una de las más notorias fue el abandono a los pequeños productores, la

⁸ INDEC. Censos de población 1991 y 2001.

mayoría de los cuales se encontraba en situación de pobreza. Tal como señala Alemany:

“la agricultura todavía no modernizada (...) era un emergente del proceso de “descampesinización” que tarde o temprano se iba a completar en los países latinoamericanos, y por ese motivo, ésta problemática debía ser cada vez más atendida por el componente de “ayuda social” y contención que el Estado necesita impulsar como parte de sus funciones de legitimidad política, pero no integrada a la problemática del crecimiento de la agricultura y el desarrollo rural” (2008: 31).

Es por eso que, la extensión se convirtió en una práctica asistencialista, como una forma de contener a los expulsados, producto de los ajustes del modelo privatista neoliberal.

En este sentido, desde el discurso neoliberal se pensaba que la transformación y modernización de la agricultura estaba concluida, que los procesos de desaparición de productores familiares y campesinos y de la agricultura como “forma de vida”, eran irreversibles. Se planteaba entonces, la desaparición de la extensión rural a través de la privatización. El debate privatizador en torno a la extensión estuvo, de este modo, hegemonizado por las ideas del libre mercado irradiadas desde los centros de la economía global junto a organismos como la FAO⁹ que, adscribiendo al pensamiento neoliberal, propusieron acciones para mitigar el costo social y ambiental de estas políticas (Alemany, 2008: 34).

En este sentido, el pensamiento neoliberal elimina de su discurso el concepto de desarrollo (rompiendo la equivalencia entre modernización y desarrollo) desplazándolo por el crecimiento comandado por el mercado (Alemany, 2008: 35-36). Para el discurso neoliberal, al prescindir del rol del Estado, el desarrollo implica una intervención innecesaria y distorsionante del mismo. Es por eso que, por un lado se reduce la práctica extensionista a un carácter asistencialista para mitigar los efectos de los ajustes estructurales, y por otro, se promueve su reemplazo por una intervención privada que asista a los actores claves del complejo agroalimentario.

4.4. Crisis del neoliberalismo y la posibilidad de nuevas prácticas articuladoras

Tras dos períodos consecutivos en la presidencia de la Nación, Menem es sucedido por Fernando de la Rúa en 1999. El gobierno de De la Rúa estuvo signado por la incapacidad para revertir el modelo económico del menemismo. Por el contrario, lo profundizó con el regreso de Cavallo al Palacio de Hacienda. El fuerte endeudamiento externo, los altos niveles de desempleo y marginalidad, la baja productividad de la economía nacional, la sobrevaluación del peso con respecto al dólar y la fuga masiva de capitales, fueron los detonantes de un estallido social. Las consecuencias de un modelo que incrementó el desempleo y

⁹ La FAO pasa de ser una organización pionera en la promoción de la extensión rural a desentenderse y eliminarla de sus preocupaciones institucionales (Alemany, 2008: 34).

la marginalidad, puso en jaque la gobernabilidad y en diciembre de 2001, De la Rúa renunció en un clima de tensión y movilización social.

Pero, tal como señala Giarraca (2003), lo que ocurrió a fines de 2001 no se deriva, necesariamente de la década anterior. Las protestas, los ajustes, la pobreza, el desempleo, la pérdida de derechos sociales, el vaciamiento de la palabra por parte de los políticos; serían los escenarios, los antecedentes que permiten comprender y desde los cuales se derivan estos acontecimientos. En este sentido y a diferencia de las protestas que caracterizaron la década anterior, no se trata de intereses particulares (Giarraca, 2003:274). Por el contrario, Giarraca señala que:

“intereses e identidades sociales fueron suspendidos en tanto la calle no la ganaron los desocupados, los obreros, los ahorristas, sino que salen pobladores de la gran ciudad, ciudadanos sin estado, en una demanda que difícilmente se hubiese podido realizar a otro, o, pensar que se podía llegar a cumplir: el famoso que se vayan todos. En esta enunciación política, polisémica y precaria recaían los nuevos sentidos de las protestas. Una rebelión contra la democracia liberal que acompañó al capitalismo de fin de siglo: la representación política” (2003: 274).

En este contexto, por decisión de la Asamblea Legislativa asume la presidencia de la Nación el senador Eduardo Duhalde. Una de las primeras medidas de este gobierno, fue la devaluación de la moneda argentina, acabando así con la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991. De esta manera, se procedió a la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, a la vez que se pusieron en marcha cerca de 2 millones de planes sociales para contrarrestar los efectos de la pobreza y la indigencia, que habían crecido considerablemente en esos años.

Los sectores agropecuarios vinculados a la exportación se vieron favorecidos por el aumento del precio del dólar. En este sentido:

“el factor fundamental fue el hecho de que la devaluación creó un tipo de cambio más alto, que si bien generó un aumento de precios en muchos productos e insumos, afectando a la población en general, por otro lado ayudó a mejorar sustancialmente la rentabilidad de la producción de bienes de exportación” (Sili, 2005: 17).

En consecuencia, hubo un aumento en el precio de los productos que llevó a que fueran vendidos con un dólar sobrevaluado generando una alta rentabilidad. A su vez, al momento de la devaluación, el sector agropecuario se encontraba con un alto endeudamiento. La pesificación de las deudas habilitó a que los productores puedan liquidar sus deudas ya que, por un lado, su producción cotizaba en dólares y, por el otro, sus deudas se mantuvieron en pesos (Sili, 2005:17). Otro punto importante, es que al momento en el que estalló la crisis, muchos productores tenían guardada su producción pudiendo venderla posteriormente a un precio mayor. A su vez, a nivel global, comienza un sostenido mejoramiento de los precios internacionales de los granos que llevó a que cada vez, la producción se vendiera a mayores precios. Este aumento progresivo, minimizó el efecto de la

retenciones¹⁰ agropecuarias (que en ese momento eran del 20%) dispuestas por el gobierno de Duhalde a principios de 2002. Este escenario reveló un beneficio macroeconómico en el corto plazo pero que no es sustentable a largo plazo en cuanto a las consecuencias negativas que se desprenden, tanto sociales como ambientales (Sili, 2005:31).

En el año 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner y durante su mandato se mantuvieron gran parte de los cambios formulados por Duhalde respecto a la devaluación de la moneda y la política de retenciones. En este sentido, Giarraca señala que:

“mientras el sector agrario se convertía para el gobierno en el espacio que se podía gravar dadas sus ventajas en el comercio internacional (básicamente la soja), las demandas de los campesinos desalojados por los nuevos inversores, los obreros agroindustriales despedidos, etc., con frecuencia caían en el saco roto de las autoridades estatales y, por otro lado, perdían las simpatías de las poblaciones urbanas enfrascadas en sus propios conflictos. Volvieron a circular demandas sociales agrarias en un contexto donde el campo se iba convirtiendo, según el dispositivo comunicacional del poder agrario exportador, en el gran salvador de la nación” (Giarraca, 2003: 276).

A fines de 2007, Cristina Fernández de Kirchner es electa presidenta de la Argentina. Tras los primeros meses de mandato, el 11 de marzo de 2008, el Poder Ejecutivo Nacional decreta la resolución 125 mediante la cual se aumentaron en 9,1 puntos el porcentaje de retenciones a la exportación para la soja. Hasta ese momento, el porcentaje de retenciones era del orden de un 35 %. A diferencia del sistema vigente, la novedad era la aplicación de un mecanismo de retenciones móviles que buscaba que la ganancia neta del exportador se mantenga, aunque la cotización internacional varíe. Así, a mayor precio internacional, aumentarían las retenciones, mientras que, ante una caída en la cotización internacional, las retenciones disminuirían. La medida del gobierno fue rechazada por las entidades tradicionalmente representantes del sector agropecuario: Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO). Estas entidades emprendieron una protesta que se extendería por más de tres meses, que consistió en un “lockout” a la comercialización de productos, acompañada por cortes de ruta y manifestaciones en los grandes centros urbanos.

4.5. Extensión rural en América Latina: para qué y para quiénes

El escenario latinoamericano en el que tiene lugar el debate actual en torno a las prácticas de extensión rural, es un tiempo post-neoliberal en el que “se están descomponiendo los parámetros que estructuraron la experiencia moderna del mundo, pero en el que aún no afloran los principios alternativos que organicen la

¹⁰ Las retenciones son un mecanismo de recaudación tributaria que consiste en la aplicación de un gravamen al producto que se exporta.

experiencia” (Lewkowicz, 2004: 46). Un tiempo similar al que Gramsci llamó “crisis orgánica”, donde lo viejo muere pero lo nuevo no termina de nacer (Huergo, 2007).

En este contexto, el debate en torno a la extensión rural está marcado por las crisis de principio de siglo y la presencia de nuevos gobiernos en la región que buscan rescatar la vigencia de las políticas públicas para el sector rural. Si bien es posible considerar que el debate en torno a la desaparición de la extensión rural no tiene el impulso de los noventa, sus ideas centrales siguen vigentes y en este sentido, el debate está lejos de haber concluido (Alemany, 2008: 31).

Anteriormente, reconocíamos cómo la práctica articuladora entre comunicación y extensión rural durante los noventa se encuentra hegemonizada por la articulación entre el difusionismo y una visión productivista que parte de la oposición entre agricultura “viable/no viable”. Operan en esta articulación, elementos residuales del difusionismo desarrollista que se rearticulan fijando significados tales como el productivismo y el asistencialismo, no así sobre el rol del Estado como interventor legitimado.

Frente a esta articulación hegemónica entre comunicación y extensión rural, es en el contexto de una “crisis orgánica” que emerge la pregunta sobre las nuevas formas de lo contrahegemónico. En este sentido, es posible considerar la emergencia de una perspectiva cultural (Huergo: 2004, 2007) como práctica articuladora contrahegemónica. Si bien este discurso aún no se encuentra plenamente articulado, podemos observar su “preemergencia” como parte de un proceso activo e influyente (Williams, 1997: 147). En este sentido, la perspectiva cultural propone pensar a la extensión rural como práctica inherente al encuentro cultural que se produce en la intervención. Un encuentro entre las acciones estratégicas de los extensionistas (como acciones con un horizonte político en tanto buscan la transformación de prácticas, saberes, modos de producción) y las prácticas socioculturales desarrolladas por productores y campesinos. Para que esas acciones estratégicas tengan sentido para productores y campesinos es que tienen que partir del reconocimiento del mundo cultural rural. El reconocimiento cultural de esas prácticas adquiere importancia en tanto, luego de haber pasado por un período de crisis orgánica, de destitución y deslegitimación de las instituciones, se busca su restitución y para ello, es necesario situar las acciones estratégicas allí donde el sujeto y su cultura es reconocida. Las acciones estratégicas, adquieren sentido en la medida en que los sujetos (en este caso, campesinos y productores) se sienten identificados con ellas o alguna parte de ellas. Existe ese encuentro en la extensión en la medida en que se produce un proceso de identificación. Identificaciones que se producen con algún aspecto de los referentes y/o propuestas de intervención (Huergo, 2004: 12-13).

En esta perspectiva, adquieren importancia, en términos residuales, elementos del discurso de Paulo Freire. En primer lugar, un significado de extensión que ya no es “para”, donde existe una separación entre técnicos extensionistas y productores, sino que es una extensión “con” el otro. En segundo lugar, la importancia de recuperar la noción de reconocimiento del universo vocabular en la medida en que el desarrollo de acciones estratégicas, como los son las prácticas

de extensión rural, necesitan reconocer la pertenencia del lenguaje con el que los sujetos interpretan el mundo.

5. Algunas consideraciones finales

“Hay una enorme cantidad de experiencias que hay que rescatar, que hay que destacar, que reconocer. No se puede crear algo sobre la base de campo arrasado, diciendo que la gente está totalmente equivocada. Ya sabemos que nadie está totalmente equivocado.”

Daniel Prieto Castillo¹¹

Reconocíamos cómo, en el contexto del difusionismo desarrollista (como estrategia continental desplegada en América Latina) se fue consolidando una formación hegemónica que estableció la equivalencia entre modernización y desarrollo. Así, en el contexto fundacional del INTA, las condiciones que daban sentido a su misión institucional fueron bajo el estatuto de la inclusión de tecnologías y la transferencia de conocimientos para la modernización del sector rural.

Frente a la hegemonía del discurso desarrollista, desde el continente latinoamericano surgió la disputa por otros significados posibles de la relación entre comunicación y extensión rural, como parte del debate más amplio de las vinculaciones entre comunicación y desarrollo, centrándose en la participación y el diálogo para la transformación social. El pensamiento de autores como Paulo Freire se desarrolla en relación a los efectos del difusionismo desarrollista en la práctica de extensión rural en Latinoamérica desnaturalizando gran parte de sus significados dominantes para postular una extensión como práctica educativa, ya no para la opresión y persuasión, sino como liberación y transformación para la revolución.

La instauración de las dictaduras latinoamericanas y la consolidación del neoliberalismo como estrategia global en el marco de la creciente transnacionalización de la economía, imposibilitó la consolidación de una formación hegemónica centrada en prácticas participativas y transformadoras. En el contexto del neoliberalismo de la década del noventa, se rompe la tradicional equivalencia entre modernización y desarrollo por la equivalencia entre productivismo y crecimiento económico, como restauración del modelo agro exportador. En consecuencia, se fragmenta la estructura social agraria (caracterizada hasta ese entonces por la convivencia entre pequeños y medianos productores con los grandes terratenientes) y se reestructura según la caracterización que distingue una agricultura “viable” e industrializada frente a una agricultura “no viable” ligada al asistencialismo estatal. La extensión rural, en este marco, pareciera asistir al cierre de su ciclo histórico en Latinoamérica para su privatización y la reducción a la ayuda social.

¹¹ Uranga, W. (2007) “La educación debe tener la misma prioridad que luchar contra el hambre” en *Página/12*, 5 de febrero de 2007.

Sin embargo, actualmente la extensión rural adquiere un nuevo impulso a través de políticas tendientes a su recuperación en el marco del debate aún no concluido de los noventa (Alemany, 2008), como la práctica de intervención en el medio rural. En este sentido, la pregunta que atravesó nuestro trabajo tuvo que ver con la posibilidad de reconocer en el contexto actual las formas que adoptan las prácticas articuladoras entre comunicación y extensión rural

Así, observamos en el INTA la existencia de una formación hegemónica y tradicional anclada en el supuesto productivista de la década del noventa que distingue a los productores como “viables/no viables” o “potables/no potables”. Los productores “no viables” o “no potables” son aquellos que se encuentran por fuera de las fronteras de “lo productivo”.

Si bien encontramos que esta articulación es hegemónica, la búsqueda intencional y explícita de un nuevo modelo de extensión rural que se realiza desde la institución permitiría reconocer algunos elementos emergentes al interior de una visión de involucramiento que podrían constituirse como una nueva articulación. Es en esta visión sobre qué otras formas de involucramiento técnico se están construyendo, que se vislumbran los sentidos que podrían constituir una nueva práctica articuladora:

En primer lugar, desde la práctica institucional del INTA de una continua y sostenida reflexión en relación a sus prácticas de intervención. Reflexión que tiene lugar en la búsqueda del INTA por resituar la interpelación de sus acciones de intervención luego de un período de deslegitimación de las instituciones y del intento de cierre del ciclo histórico de la extensión rural en América Latina.

En segundo lugar, un elemento reconocible ya no desde la dinámica institucional, sino en la relación entre técnicos extensionistas y productores: es el reconocimiento del otro en el marco de la construcción de un “umbral de confianza”. Reconocimiento que tiene lugar en el desafío, señalado anteriormente, de situar las acciones estratégicas del INTA y sus técnicos allí donde el sujeto y su cultura se reconocen, es decir en su mundo cultural. Recuperamos aquí el pensamiento de Freire, en términos de formación discursiva residual, y su importancia en la construcción de una extensión que trabaje “con” los otros y no “para” los otros, que como señala Jorge Huergo (2004) rápidamente se vuelve “sobre” y luego “contra” los otros.

Por último, consideramos que la incorporación de comunicadores y su participación en equipos interdisciplinarios representa una apuesta en la pugna por nuevos significados de las articulaciones posibles entre comunicación y extensión rural. Luego de más de treinta años de vacío en los que la reflexión comunicacional en este ámbito quedó relegada a sus dimensiones más instrumentales, es el momento de interrogarnos en este nuevo contexto sobre los posibles aportes de los comunicadores sociales a este proceso de reflexión. En este sentido, recuperamos las palabras de Daniel Prieto Castillo:

“el problema suele ser que cuando se abren oportunidades nos encontramos con las manos vacías de recursos para trabajar. De modo que continuamos insistiendo en los ideales de una comunicación diferente, sostenidos por el largo camino recorrido en América Latina y en nuestro país.” (2007: 23)

Considerando que vivimos un proceso que constituye una oportunidad histórica en la que nuestro campo de estudios puede ser central en la conformación de nuevas prácticas articuladoras entre comunicación y extensión rural, creemos que nuestro trabajo pone de manifiesto el desafío y los interrogantes del momento en el que nos encontramos: la construcción interdisciplinaria de acciones estratégicas que recuperen la necesidad de desplegar políticas públicas estatales que partan del reconocimiento del mundo cultural rural que posibiliten la emergencia de otras voces, otros actores y otras prácticas en la definición de un nuevo modelo productivo agropecuario.

6. Bibliografía

- Alemaný, Carlos (2003) “Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la extensión rural en el INTA” en Thornton, R. y G. Cimadevilla (edit.), *La extensión rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*. Buenos Aires, INTA.
- Alemaný, Carlos (2008) “Volvió la extensión y se armó la discusión” en Thornton, R. y G. Cimadevilla (edit.), *Grises de la extensión, la comunicación y el desarrollo*. Buenos Aires, INTA.
- Barranquero, Alejandro (2009) “Latinoamérica: la arquitectura participativa de la Comunicación para el cambio” en *Diálogos de la comunicación* N° 78, FELAFACS.
- Beltrán, Luis Ramiro (2005) “La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo” en III Congreso Panamericano de la Comunicación *“Integración comercial o diálogo cultural ante el desafío de la sociedad de la información”*. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
- Cimadevilla, Gustavo; A. Cantú; E. Carniglia (1997) *La bocina que habla. Antecedentes y perspectivas de los estudios de comunicación rural*. UNRCuarto.
- Cimadevilla, Gustavo (2003) “La naturaleza no natural de la extensión rural” en Thornton, R. y G. Cimadevilla (edit.). *La extensión rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur*. Buenos Aires, INTA.
- Díaz Bordenave, Juan (2007) “Sin título” en Seminario Internacional *“Comunicación y Desarrollo: Encuentros en la diversidad”*. Buenos Aires, INTA.
- Duarte, Marisa (2002) “El consenso de Washington y su correlato en la reforma del Estado en la Argentina: los efectos de la privatización” en AA.VV., *Más allá del pensamiento único*. Buenos Aires, CLACSO.
- Erbetta, Hugo (2008) “Extensión y desarrollo sustentable. La búsqueda de una formación bien puesta” en Thornton, R. y Cimadevilla, G. (edit.), *Grises de la extensión, la comunicación y el desarrollo*. Buenos Aires, INTA.
- Giarraca, Norma (2001) “¿Una nueva ruralidad en América Latina?” Prólogo en Giarraca, N. *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* Colección grupos de trabajo de CLACSO, Desarrollo Rural. Buenos Aires, CLACSO.

- Freire, Paulo (1973) *¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural*. México, Siglo XXI.
- Freire, Paulo (1970) *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires, Siglo XXI
- Huergo, Jorge (2001) "Popularización, mediaciones y producción de significados" en AA. VV., *Terra Incógnita. A Interface da Ciencia e público*. Rio de Janeiro, Casa de Ciencia
- Huergo, Jorge (2004a) "Desafíos a la extensión desde la perspectiva cultural" en *Dialoguemos*. Año 8, número 14. Buenos Aires, INTA, 2004, pp. 9-13.
- Huergo, Jorge (2004b) "Comunicación popular y comunitaria: desafíos político-culturales" en *Nodos de Comunicación/Educación*. Año 4, número 4. La Plata, Centro de Comunicación/Educación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Disponible en: <http://www.perio.unlp.edu.ar/nodos/>
- Huergo, Jorge (2005) *Hacia una genealogía de Comunicación/Educación. Rastreo de algunos anclajes político-culturales*. La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación (UNLP).
- Huergo, Jorge (2007) *Los medios y tecnologías en educación*. La Plata, Centro de comunicación y educación (UNLP).
- INTA (1997) *Pautas de política institucional sobre Extensión y Transferencia de Tecnologías*. Buenos Aires, INTA.
- INTA (2005) *El INTA que queremos. Plan Estratégico Institucional 2005-2015*. Buenos Aires, INTA.
- Kaplún, Mario (1985) *El comunicador popular*. Buenos Aires, Editorial LUMEN-HVMANITAS.
- Laclau, Ernesto y Ch. Mouffe (1987) *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Madrid, Siglo XXI.
- Laclau, Ernesto (1990) "La imposibilidad de la sociedad" en *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Nueva Visión, Buenos Aires
- Laclau Ernesto (1996) "¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?" en *Emancipación y diferencia*. Buenos Aires, Ariel.
- Lewkowicz, Ignacio (2004) *Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez*. Buenos Aires, Paidós.
- Prieto Castillo, Daniel (2007) "Comunicación para el desarrollo: entre los irrenunciables ideales y los juegos de poder" en Seminario internacional "Comunicación y Desarrollo: Encuentros en la diversidad". Buenos Aires, INTA.
- Saur, Daniel (2008) "¿Aplicar la teoría? Reflexiones en torno a la noción de aplicación en el análisis del discurso" en *Giros Teóricos. Diálogos y debates*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados.
- Sili, Marcelo (2005) *La Argentina rural: de la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo de los territorios rurales*. Buenos Aires, INTA.
- Soage, Ana (2006) *La teoría de la escuela de Essex en su contexto histórico*. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. Universidad de Granada.
- Teubal, Miguel (2001) "Globalización y nueva ruralidad en América Latina" en Giarraca, N. *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* Colección grupos de trabajo de CLACSO, Desarrollo Rural. Buenos Aires, CLACSO.
- Williams, Raymond (1997) *Marxismo y literatura*. Barcelona, Península.